DATOS SENSIBLES

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 912/2014

QUEJOSO Y RECURRENTE: *** Y**

OTRO

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
SECRETARIA ADJUNTA: LUZ HELENA OROZCO Y VILLA

SUMARIO

*****, por su propio derecho y en representación de su menor hijo, formuló incidente derivado del juicio de divorcio sin expresión de causa, en el que demandó de ***** un régimen de visitas y convivencias familiares entre el incidentista y su menor hijo, dentro de la jurisdicción del juez del conocimiento (Distrito Federal). La sentencia que resolvió tal incidente acogió parcialmente la pretensión del actor; decisión que fue confirmada en la apelación. En contra de dicha resolución, el actor promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado resolvió negar el amparo solicitado, lo que dio origen al presente recurso de revisión.

CUESTIONARIO

En su demanda de amparo, ¿la parte quejosa planteó la inconstitucionalidad de alguna ley o norma general o solicitó la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal? ¿El Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre dicho planteamiento de constitucionalidad?

México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al **cinco de noviembre de dos mil catorce**, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Mediante la que se resuelve el amparo directo en revisión 912/2014, interpuesto por *****, por derecho propio y en representación de su menor hijo *****, contra la sentencia dictada el diez de febrero de dos mil catorce por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del

Primer Circuito, en el juicio de amparo directo DC-*****, de su índice.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil diez ante el Juzgado Trigésimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, *****, por derecho propio y en representación de su menor hijo *****, formuló **incidente de establecimiento de visitas y convivencias** derivado del juicio de divorcio incausado en el expediente 368/2009.
2. En su escrito incidental, demandó de *****, lo siguiente:
 - 2.1. Un régimen de visitas y convivencias familiares, entre el incidentista y su menor hijo, por no contar con la guarda y custodia de éste, en los términos siguientes:
 - A. Las convivencias familiares de los fines de semana alternados, esto es, el sábado de las nueve de la mañana al domingo a las diecinueve horas de cada quince días.
 - B. Para el apoyo de tareas escolares, los martes, miércoles y jueves de cada semana de las dieciséis a las dieciocho horas.
 - C. Durante los períodos vacacionales, la Semana Santa de cada año; la segunda quincena de julio durante el período vacacional del verano y la semana correspondiente a la Navidad, por lo que hace a las vacaciones de fin de año.

D. En términos de los artículos 941 Bis y 941 Ter del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal¹, al no contar el actor en el incidente respectivo con la guarda y custodia del menor, para el caso de cambio de domicilio, la madre del menor debe proporcionar un número telefónico convencional.

2.2. Apremio a la demandada para que, en el caso de no permitir las convivencias familiares o la comunicación telefónica, se actúe conforme al último párrafo del artículo 941 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y se reserve su derecho para ejercer las acciones legales correspondientes.

3. **Radicación del asunto.** Correspondió el conocimiento del asunto al Juez Trigésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, quien registró la demanda con el número de expediente **368/2009** y la admitió.
4. **Contestación de la demanda.** La enjuiciada dio contestación a la demanda, en la que negó todos los derechos inherentes al actor en relación a su menor hijo. La demandada expuso que no se oponía con

¹ “**Artículo 941 Bis.** (...) Cuando cambie de domicilio el ascendiente que conserva la guarda y custodia, éste tiene la obligación de informar al Juez y a quien no ejerce la custodia los datos del nuevo domicilio y número telefónico para efecto de mantener la comunicación del menor y del ascendiente que no ejerza la guarda y custodia.”

“**Artículo 941 TER.** El ascendiente que no le sea otorgada la custodia podrá convivir tal y como lo fije el Juez, diversos días de la semana, fuera del horario escolar y sin desatender las labores escolares y debiendo auxiliarlo en dichas actividades.

Asimismo, en forma equitativa, se podrá regular la convivencia en fines de semana alternados, periodos de vacaciones escolares y días festivos; cuando estos ya acudan a centros educativos.

El Juez de lo Familiar, antes de regular el derecho de convivencia de manera provisional, deberá tomar en cuenta todos los elementos que estén a su alcance para decidir bajo el principio del interés superior del menor. En especial valorará el hecho de que una de las partes manifieste que ha habido violencia familiar, pudiendo solicitar valoración psicoemocional que determine si existen síntomas en el menor, de haber vivido cualquier tipo de violencia familiar, ya sea psicológica, física o sexual, independientemente de que exista o no indagatoria al respecto, a fin de proteger la integridad física y psicológica de los hijos.

En caso de duda, y para salvaguarda de los hijos menores de edad o incapaces, deberá ordenar que las convivencias se realicen en los Centros e Instituciones destinados para tal efecto, únicamente durante el procedimiento.

Las convivencias de manera provisional no se otorgarán por el Juez de lo Familiar cuando exista peligro para la integridad física, sexual y psicológica de los hijos menores de edad.”

el cambio de horario solicitado por el actor y se allanó a tal petición siempre y cuando la entrega y la reintegración de su hijo se realizara en el domicilio de aquélla.

5. **Sentencia de primera instancia.** El juez dictó sentencia definitiva el veintitrés de abril de dos mil doce, en la que acogió en parte la pretensión del actor. Al respecto, fijó el régimen de convivencias de la siguiente manera:

- (i) Los fines de semana de cada quince días, para lo cual el actor debe recoger al menor en el domicilio que éste habita con su mamá y lo debe reintegrar en ese lugar a las diecinueve horas del domingo siguiente. Para constatar el cumplimiento de tal decisión, el juez del conocimiento ordenó girar exhorto al juez competente con jurisdicción en Ecatepec, Estado de México, para que en auxilio de las labores del juzgado, asigne a un fedatario público adscrito a su juzgado para que comparezca a dar fe del cumplimiento a lo ordenado, los tres primeros fines de semana;
- (ii) Respecto a las convivencias para la ayuda al menor con la tarea, las decretó el miércoles de cada semana de las dieciséis a las dieciocho horas y
- (iii) En relación a las convivencias en el período vacacional, se acogió lo solicitado por el actor y se determinó que se alternará cada año.
- (iv) No emitió condena en costas.

6. **Recurso de apelación.** En contra de dicha resolución, el actor interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la

Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el toca *****. Un magistrado integrante de dicha Sala dictó sentencia el ocho de octubre de dos mil doce, mediante la cual resolvió **confirmar** la sentencia recurrida.

7. **Primer juicio de amparo directo.** Tal decisión fue reclamada en el juicio de amparo directo promovido por el inconforme, del que conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el expediente **DC-393/2013**. En sesión de veinte de septiembre de dos mil trece, dicho tribunal resolvió, por mayoría de votos, **conceder el amparo** para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera una nueva en la que resolviera *de manera colegiada*, con libertad de jurisdicción, el recurso de apelación planteado, para lo cual se debía observar lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal².
8. **Sentencia de la Sala civil en cumplimiento.** El treinta de septiembre de dos mil trece, la Sala responsable dictó nueva resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la que resolvió **confirmar** la sentencia de primera instancia, sin condenar en costas.

² “**Artículo 45.** Las Salas en materia Familiar, conocerán:

I. De los casos de responsabilidad civil y de los recursos de apelación y queja que se interpongan en asuntos de materia Familiar, contra las resoluciones dictadas por los jueces del mismo ramo;

II. De las excusas y recusaciones de los Jueces del Tribunal Superior de Justicia, en asuntos del orden Familiar;

III. De las competencias que se susciten en materia Familiar entre las autoridades judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y

IV. De los demás asuntos que determinen las leyes.

Las sentencias en los asuntos a que se refieren las fracciones anteriores, se pronunciarán de manera colegiada tratándose de definitivas o de resoluciones que pongan fin a la instancia y las que versen sobre custodia de menores. En todos los demás casos se dictarán unitariamente por los Magistrados que integren la Sala conforme al turno correspondiente.

Cualquiera de los Magistrados podrá determinar que el fallo se realice en forma colegiada en razón del criterio que se va a establecer o por otra circunstancia.”

9. Tal decisión fue reclamada en el juicio de amparo directo promovido por el propio inconforme, del que conoció nuevamente el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO

10. **Segundo juicio de amparo directo.** Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil trece, el actor y en representación de su menor hijo promovieron juicio de amparo directo **DC-*******, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En su demanda, señaló que la sentencia de la Sala responsable era violatoria de los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal.
11. El Tribunal Colegiado dictó sentencia en sesión de diez de febrero de dos mil catorce, en el que resolvió **negar el amparo**.
12. **Recurso de revisión.** Inconforme con la ejecutoria de amparo, el quejoso interpuso recurso de revisión mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil catorce en el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
13. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, por acuerdo de Presidencia de once de marzo de dos mil catorce, se admitió el recurso de revisión y se registró con el número 912/2014. Asimismo, se ordenó su turno al Ministro José Ramón Cossío Díaz y su radicación a la Primera Sala del propio órgano, dado que la materia del asunto corresponde a su especialidad.
14. **Acuerdo de avocamiento.** La Primera Sala avocó el asunto por auto de veintisiete de marzo de dos mil catorce y ordenó el envío de los

autos a la ponencia designada para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

III. COMPETENCIA

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de haberse interpuesto en contra de la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, en el cual se alega la subsistencia de un planteamiento de constitucionalidad.

IV. OPORTUNIDAD

16. El recurso de revisión fue interpuesto oportunamente, pues la sentencia se notificó por medio de lista a la parte quejosa el diecisiete de febrero de dos mil catorce; surtió efectos al día hábil siguiente (martes dieciocho de febrero). De manera que el plazo de diez días para interponer el recurso de revisión, previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del diecinueve de febrero al cuatro de marzo de dos mil catorce, con exclusión de los días veintidós y veintitrés de febrero, uno y dos de marzo, por ser sábados y domingos

y, por tanto, inhábiles, en conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

17. Por tanto, si el recurso de revisión fue interpuesto el tres de marzo de dos mil catorce ante la Oficialía de Partes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, su interposición es oportuna.

V. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO

18. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal³; 81, fracción II, de la Ley de Amparo⁴; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación⁵;

³ **"Artículo 107.** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...)

IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras; (...)"

⁴ **"Artículo 81.** Procede el recurso de revisión: (...)

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

⁵ **"Artículo 10.** La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: (...) **III.** Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales; (...)"

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: (...) **III.** Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito: - - - a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; (...)"

asimismo, en el punto Primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo 5/1999, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve⁶. En los preceptos mencionados se advierte que, por regla general, las sentencias que dicten los tribunales colegiados de circuito en los juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, por ende, en principio son inatacables. Sin embargo, por excepción, tales sentencias pueden ser recurridas en revisión siempre que en ellas se decidan o se hubiera omitido decidir temas propiamente constitucionales, entendiendo por éstos tanto la inconstitucionalidad de una norma como la interpretación directa de preceptos de la Constitución Federal.

19. De ahí que dicho medio de impugnación es procedente: **a)** cuando subsista en el recurso de revisión el problema de constitucionalidad de leyes; **b)** cuando en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y **c)** cuando el Tribunal Colegiado de Circuito omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución⁷.

⁶ **"PRIMERO.** Procedencia. - - - I. El recurso de revisión es procedente contra sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados, si se reúnen los supuestos siguientes: - - - a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo. [...]".

⁷ Al respecto, se comparte el criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 64/2001, publicada en la página 315, del Tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: **"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.** Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los

20. Además, para la procedencia del recurso de revisión debe surtirse el requisito de que el problema de constitucionalidad resuelto u omitido en el juicio de amparo sea considerado de importancia y trascendencia; sin que se surta tal requisito cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de amparo y cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja o en casos análogos.
21. Esta Primera Sala estima que el presente recurso **debe desecharse** por no reunir los requisitos de procedencia, como se analizará a continuación.
22. **Cuestiones necesarias para resolver el asunto.** A fin de demostrar la improcedencia del recurso de revisión, es importante dar cuenta de 1) los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo; 2) las razones que el Tribunal Colegiado tomó en cuenta para negar el amparo solicitado y, finalmente, 3) los agravios planteados por el recurrente.

recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme a la lógica del sistema, tendrá que justificarse debidamente."

23. **Conceptos de violación.** En su demanda de amparo, el quejoso estimó como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, esgrimió esencialmente los siguientes motivos de inconformidad:

23.1. El quejoso inició con la exposición de lo que llamó “marco conceptual preliminar” en el que estableció lo que a su juicio debía entenderse por “retroactivo y retroactividad”. Ello toda vez que, a su parecer, la sentencia reclamada varió indebidamente el ámbito de competencia del juez en la controversia, trasladando algunos efectos del fallo al Estado de México.

Lo anterior a pesar de que —señaló el quejoso— existió sumisión expresa de las partes en el juicio a la competencia y jurisdicción del Distrito Federal y “lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal”. Sin embargo —adujo—, la autoridad responsable decretó que las convivencias familiares se practicaran fuera de su ámbito de competencia, lo que lo dejó en estado de indefensión.

23.2. Al respecto, el promovente del amparo indicó como leyes aplicadas inexactamente o dejadas de aplicar los artículos 55, 57, 81, 143, 144, 151, 152, 153, fracciones I y II, 258, 278, 279, 286, 327, fracción VIII, 398, fracción III, 402, 403 y 941 TER del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 1º, 4º, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por falta de aplicación.

23.3. Asimismo, el quejoso señaló que la autoridad responsable otorgó la pretensión reclamada pero discriminándolo, lo que generó una desigualdad entre las partes al fijar la modalidad del régimen de convivencias, al haberlo hecho sin considerar el lugar de residencia del menor y su traslado al Distrito Federal. De ahí que estimó vulnerado el derecho a la igualdad por cuestión de género.

23.4. En su **primer concepto de violación**, el quejoso expuso que el acto reclamado resultó violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues conforme a tales preceptos a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. A su parecer, dicha prohibición fue vulnerada, pues si el juicio de divorcio se resolvió bajo la competencia del juez del Distrito Federal, ésta se actualizaba también respecto a todos los incidentes y sus consecuencias relacionados con aquel juicio.

23.5. Agregó el quejoso que en el caso ya había resolución firme sobre el juez competente, como podía advertirse del juicio de amparo 564/2009 y recurso de revisión 297/2009. Sin embargo —afirmó—, la autoridad responsable pasó por alto dichas resoluciones que han causado estado, pues al determinarse que debe recoger y entregar a su menor hijo en el Estado de México, se revocó lo resuelto en ellas. Al respecto, sostuvo que la competencia era vinculante desde su primera determinación y que no podía alterarse, retrotraerse ni revertirse, pues sería contrario a derecho y se vulneraría además el interés superior del menor.

23.6. Asimismo, el quejoso cuestionó la determinación del tribunal de alzada consistente en que no podía atender su petición sobre el lugar

en el que debían llevarse a cabo las convivencias porque ello implicaría condenar a la tercera interesada a trasladarse cierta distancia e invertir una cantidad de tiempo considerable, cuando los que convivirían serían padre e hijo, no así la madre de éste. A juicio del quejoso, dicho tratamiento resultó inicuo, cuando precisamente el lugar donde se dirime la contienda judicial debe ser donde se surtan las consecuencias legales inherentes a la misma.

23.7. En su **segundo concepto de violación**, el quejoso señaló que la Sala responsable violó lo dispuesto en los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, al no haber estudiado correctamente sus agravios, la litis propuesta y la naturaleza jurídica de las convivencia familiares y sus efectos. Lo anterior al estimar que la sentencia reclamada infringió el principio de cosa juzgada, pues las sentencias emitidas con anterioridad decretaron la competencia en el Distrito Federal, por lo que las partes no podían sustraerse a sus efectos ni variar la competencia.

23.8. Asimismo, sostuvo que al ordenarse que debe acudir a recoger a su hijo al domicilio de la tercera, ello implicó que se esté resolviendo de una forma no solicitada, ajena a la causa de pedir, pues él no pidió recoger a su hijo en el Estado de México y, en todo caso, si la acción incidental era improcedente, así debió declararse, en lugar de resolver sobre una cuestión no pedida. Máxime que variar la modalidad implementada provisionalmente sobre el régimen de visitas en el Distrito Federal, vigente desde dos mil nueve, repercutiría en la estabilidad del menor.

23.9. Además, el quejoso refirió que la autoridad responsable omitió dar cumplimiento a las determinaciones del juzgador de primera instancia de permitir las convivencias en los períodos vacacionales, por lo que se le dejó en estado de indefensión.

23.10. Así, el quejoso estimó que se debería analizar la violación procesal para que se creara el precedente relacionado con el lugar "in situ" en donde deben realizarse las convivencias familiares, relacionadas con el interés superior del menor, la competencia de un juicio y las pretensiones reclamadas, cuando existen cuestiones contradictorias que ya fueron dilucidadas y que han causado estado, para decretarse la inconstitucionalidad del acto reclamado.

23.11. En todo caso, el quejoso consideró que los temas propuestos serían competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es —afirmó— la interpretación directa de la competencia y sus efectos respecto a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para no dividir la contienda de la causa sobre el fondo; supuestos en los cuales, en su caso, podría interponer el amparo directo en revisión, en el que se resolvería la cuestión constitucional planteada en su integridad.

23.12. En su **tercer concepto de violación**, el promovente del amparo indicó que el tribunal de alzada transgredió los artículos 55, 57, 81, 143, 144, 151, 152, 153, fracciones I y II, 258, 278, 279, 286, 327, fracción VIII, 398, fracción III, 402, 403 y 941 Ter del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por falta de aplicación.

23.13. Además de reiterar sus argumentos en relación a la retroactividad y la cosa juzgada en la materia de la competencia, el quejoso adujo que la Sala responsable omitió tomar en consideración

que el menor deberá recorrer cierta distancia y asumir el “desgaste” del traslado con independencia de quien sea el progenitor que lo acompañe en el recorrido. En consecuencia —argumentó—, lo único que generó la sentencia reclamada es que solamente sea el quejoso el que tenga que asumir los costos del traslado, sufriendo por ello una inequidad procesal violatoria del artículo 4° de la Constitución Federal frente a la tercera interesada, quien no tendrá que trasladarse.

23.14. Asimismo, señaló que la sentencia reclamada generó inseguridad jurídica, toda vez que en el caso de que la tercera interesada no quisiera entregarle al menor, el quejoso no sabría a qué juez dirigirse para resolver esa cuestión.

23.15. Adicionalmente, manifestó que durante el procedimiento la tercera interesada adujo hechos de violencia de su parte, los que no probó, pero suponiendo sin conceder que se hubieran dado, la resolución permite que se exponga al menor a que sea testigo de este tipo de percances, por lo que se pone en riesgo su estabilidad emocional.

23.16. En su **cuarto concepto de violación**, el promovente del amparo expuso que el tribunal de apelación violó los artículos 4°, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, al ocasionar incertidumbre jurídica sobre las modalidades en que deben realizarse las visitas y convivencias familiares.

23.17. Esto, porque la autoridad responsable resolvió indebidamente sobre el régimen de visitas y convivencias —según el quejoso—, al no tomar en cuenta las circunstancias en que se han celebrado las

convivencias familiares en el Distrito Federal, máxime que existe una medida provisional que subsiste desde agosto de dos mil nueve.

23.18. Al respecto, el quejoso señaló la importancia de la delimitación interpretativa que los órganos jurisdiccionales deben realizar para resolver, en cada caso, la manera en que se debe fijar el interés superior del menor. Expuso también que el derecho de visitas y convivencias es fundamental entre los padres y los menores, derecho que —afirmó el quejoso— se encuentra por encima de la voluntad de la persona que tiene la custodia del niño, por estar dirigido especialmente a éste, aun cuando favorezca indirectamente a sus ascendientes. Agregó que ello no implicaba que no se debía considerar lo expuesto por la Sala responsable para evitar realizar los recorridos correspondientes para que se lleven a cabo las convivencias familiares a que tiene derecho el menor. Más bien —precisó—, lo que el quejoso estimó fue que el juzgador debió resolver acorde a las circunstancias del caso, pues derivado de ello podría tener varias posibilidades para determinar la convivencia familiar, por ejemplo, cuando la relación entre los miembros de la familia no es adecuada.

23.19. En el caso, indicó el quejoso, se hizo del conocimiento que la madre del menor solía impedir la convivencia entre él y su menor hijo. De ahí que consideró que era necesario que se supervisara la entrega y la reintegración de niño, como sucede ante el Centro de Convivencia Familiar Supervisada; circunstancias que se debieron tomar en cuenta, en atención al interés superior del menor. De manera que —a juicio del quejoso— la Sala responsable dejó de atender a la procuración de los lazos familiares, la revalorización y perfeccionamiento de las relaciones personales, el replanteamiento de los papeles que juegan el hombre y la mujer actualmente, así como las fórmulas más adecuadas

para garantizar los derechos de los niños en uniones de facto y en los divorcios.

23.20. Por tanto, el promovente del amparo alegó que la sentencia reclamada era ilegal, porque el tribunal de apelación dejó de observar que en los autos del juicio no existían elementos suficientes para resolver definitivamente sobre el régimen de visitas y convivencias que debió prevalecer entre aquél y su menor hijo, al no haber atendido el interés superior del menor. Incluso —manifestó el quejoso— dicha autoridad debió allegarse de pruebas, aun de oficio, para determinar si existía o no violencia intrafamiliar y de esa manera pudiera definir el régimen de convivencias conforme a lo solicitado por el quejoso. Entre ellas —afirmó—, debió tomarse en cuenta la opinión del menor, quien tiene once años de edad y ya cuenta con el grado de madurez para ser tomado en consideración.

23.21. Finalmente, en el **quinto concepto de violación**, el quejoso señaló que el tribunal de apelación vulneró los artículos 1º, 4º y 133 de la Constitución Federal porque omitió considerar la "igualdad entre el hombre y la mujer", lo que generó inequidad y discriminación en contra de aquél. Según el quejoso, al determinar la modalidad del régimen de convivencia, la Sala responsable no consideró el lugar de residencia del menor (Ecatepec) y su traslado al Distrito Federal (Xochimilco), obligándolo como padre a realizar los traslados correspondientes sólo a él y no a la tercera interesada, circunstancia que lo discriminó en razón de su género.

23.22. Además de contravenir el derecho a la igualdad, el quejoso estimó vulnerado también el derecho fundamental de debido proceso,

porque el régimen decretado le ocasionaría perjuicios de traslado y gastos, cuando el promovente del amparo expresó –durante el procedimiento– que no cuenta con salario. Además, el tribunal de alzada determinó ese régimen de visitas en contravención al interés superior del menor. Para apoyar su dicho, el quejoso aludió a la tesis aislada P.XXI/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es **"MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER"**, así como la tesis aislada 1a. CLII/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro **"IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4º, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES"**.

23.23. El quejoso concluyó que, como podía verse sobre el recorrido de distancias y traslados, se le discriminaría y se le otorgaría ventaja indebida a la madre del menor de no trasladarse a un lugar imparcial, dentro de la jurisdicción a la que se sometieron las partes, además, de que generaría vulneración al interés superior del menor.

24. **Sentencia recurrida.** El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito **negó el amparo** al quejoso, calificando sus conceptos de violación como **infundados** en parte, e **inatendibles** en otra. Para ello, ofreció las siguientes razones:

24.1. El Tribunal Colegiado determinó que eran infundados los conceptos de violación tendentes a cuestionar la competencia, ya que el juzgador está facultado para hacer cumplir sus determinaciones,

incluso fuera del territorio donde ejerce jurisdicción, sin que ello implique una variación competencial.

24.2. Asimismo, el tribunal estableció que no existe infracción a la cosa juzgada, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las resoluciones provisionales no causan estado y por ende no constituyen cosa juzgada.

24.3. Respecto de la afirmación del quejoso en el sentido de que no fue materia de la litis la circunstancia de que debe entregar y recoger al menor en el domicilio de la tercera interesada, el Tribunal Colegiado señaló que justamente el régimen de convivencia fue la materia a resolver en la sentencia reclamada, por lo que declaró dicho argumento como infundado.

24.4. Respecto del interés superior del menor, el tribunal sostuvo que el quejoso nunca refirió que el menor corriera algún peligro si se le recoge en el domicilio de la tercera interesada y ahí se le reintegra, pues el traslado de Ecatepec a Xochimilco no implica intrínsecamente alguna afectación al menor. Al contrario —señaló el órgano colegiado—, se fortalecerán los lazos entre padre e hijo, y si bien es cierto que ello implica gastos para el quejoso, es una cuestión que no puede afectar la visita y convivencias del menor.

24.5. Asimismo, el tribunal consideró que al acudir el quejoso al domicilio del menor a ayudarle en sus tareas escolares, beneficiará al menor, quien tendrá en su domicilio los libros, cuadernos y demás instrumentos para hacer las tareas, los que no tendría si hiciera la

tarea en el Centro de Convivencias del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, donde además las horas de traslado reducirían el tiempo en que el quejoso conviviría con su hijo.

24.6. En esas condiciones, el Tribunal Colegiado concluyó que, atendiendo al interés superior del menor, fue correcto que se haya determinado que las visitas y convivencias que tenga el menor con su progenitor deban ser realizadas como lo determinó la autoridad responsable y no en el Centro de Convivencias del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El tribunal federal sustentó esa decisión en las jurisprudencias de rubros **"DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. COMPRENDE ASPECTOS DE CARÁCTER SUSTANTIVO Y PROCESAL ENCAMINADOS A LA PROTECCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR."**⁸ y **"RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. MODALIDADES PARA SU IMPLEMENTACIÓN."**⁹

24.7. Por otro lado, dicho órgano jurisdiccional estimó infundada la manifestación del quejoso en la que adujo que se debió atender que no había elementos para resolver el asunto, pues consideró que la autoridad responsable sí tuvo elementos y atendió a las circunstancias particulares del menor como su edad, su escolaridad (primaria), la

⁸ Tesis I.5o.C. J/17, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, junio de 2011, materia civil, de la Novena Época, página 962, registro 161873, que dice: *"Este derecho, como cualquier otro, para lograr su plena eficacia, debe comprender aspectos sustantivos y procesales; por ello, el Estado Mexicano ha comprometido esfuerzos a nivel nacional e internacional en ambos rubros, tomando siempre como punto de partida el interés superior del menor."*

⁹ Tesis I.5o.C. J/26, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, junio de 2011, materia civil, de la Novena Época, página 1036, registro 161776, que dice: *"El derecho de visitas y convivencias se refiere a cualquier forma de comunicación humana que tiende a estrechar los lazos familiares, por ello, al implementar el régimen respectivo, el juzgador debe resolver acorde con las circunstancias de cada caso, para lo cual cuenta con una gama muy amplia de posibilidades para promover la convivencia, la cual puede darse mediante una carta o un telegrama, una llamada telefónica, un correo electrónico, una videoconferencia, una reunión o una estancia por horas, días o semanas, pues lo que trasciende es que todas son formas de convivencia que propician el trato humano, aunque sin lugar a dudas ello ocurre con mayor intensidad cuando las personas directamente se ven, se dan afecto y se conocen mejor; debiendo prevalecer siempre en las modalidades que se adopten, el derecho de los menores, conforme a su interés superior."*

voluntad del infante (manifestación de su deseo de convivir con su padre), así como al hecho de que nunca se acreditó que el niño sufriera algún riesgo al convivir con su padre.

24.8. Igual calificación mereció por parte del Tribunal Colegiado el alegato sobre la vulneración al principio de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Al respecto, el tribunal estimó que al decretar que el quejoso debía acudir al domicilio de la tercera interesada a entregar y recoger al menor, la Sala responsable atendió al interés superior del menor y no a lo que mejor conviniera al promovente del amparo o a la tercera interesada. De ahí que concluyó que no existió una infracción al principio de igualdad en la resolución reclamada.

24.9. Finalmente, el Tribunal Colegiado estimó infundado lo afirmado por el quejoso en el sentido de que la autoridad responsable omitió dar cumplimiento a las determinaciones del juez de primera instancia de permitir las convivencias en los períodos vacacionales. Lo anterior con el argumento de que la Sala responsable no tenía que dar cumplimiento a tal determinación pues su actuar se limitó a confirmar la sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de establecimiento visitas y convivencias.

25. **Agravios.** El recurso de revisión contiene los siguientes motivos de inconformidad:

25.1. En su **primer agravio**, el recurrente adujo que el tribunal colegiado *omitió* fijar el justo alcance e interpretación de los artículos 1º, 4º y 133 de la Constitución Federal, que propuso en sus conceptos de violación, a fin de generar un criterio sobre los efectos y

consecuencias jurídicas del divorcio sin expresión de causa. Por lo tanto, el recurrente sostuvo que el tribunal dejó de analizar la transgresión procesal alegada en los motivos de inconformidad en relación al principio de igualdad entre el hombre y la mujer y confundió la situación jurídica relacionada con el interés superior del menor.

25.2. A juicio del quejoso, dicho órgano jurisdiccional no analizó las pruebas aportadas en el juicio, lo cual trascendió al resultado del fallo, pues ello trajo como consecuencia la falta de valoración de aspectos importantes como los efectos de la cosa juzgada, conforme a la interpretación judicial y al principio *pro homine*.

25.3. En efecto, –continuó el recurrente– el tribunal federal omitió analizar los conceptos de violación alegados, por violación a los artículos 55, 57, 81, 143, 144, 151, 152, 153, fracciones I y II, 258, 278, 279, 286, 327, fracción VIII, 398, fracción III, 402, 403 y 941 TER del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 1°, 4°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con la falta de competencia del juez del Distrito Federal para establecer consecuencias jurídicas fuera de su territorio, esto es, en el Estado de México.

25.4. Ello conforme a los antecedentes procesales, continuó el recurrente, ya que el tema de competencia fue materia de diverso juicio de amparo indirecto, de otro juicio de amparo directo e, incluso, de un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, estimó que se trataban de fallos irrevocables constitucionalmente, es decir, de cosa juzgada, de manera que los efectos de esas resoluciones no podían retrotraerse.

25.5. Consecuentemente, para el quejoso, lo relacionado con las convivencias familiares y el lugar "in situ" resultaba importante, pues desde agosto de dos mil trece la demandada obstaculizó que se efectuaran las convivencias familiares en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada. De ahí que deberían analizarse los conceptos de violación hechos valer, según el promovente del amparo, máxime que lo que estaría en riesgo sería el interés superior del menor por la posibilidad de que se mermara la relación padre e hijo. Asimismo, el recurrente insistió en que la resolución no evita que el menor tenga que sufrir el desgaste del traslado, sino únicamente que la tercera interesada no tenga que trasladarse, lo que implica una ventaja inicua, de manera que la interpretación del tribunal federal al respecto resultó inadecuada y deficiente; interpretación que, a juicio del quejoso, trascendió al resultado del fallo, por falta de valoración de los argumentos que expuso.

25.6. En el **segundo agravio**, el recurrente adujo que en la sentencia recurrida se *omitió* fijar el alcance e interpretación de los artículos 1º, 4º y 133 constitucionales, para determinar un criterio sobre los efectos y consecuencias jurídicas del divorcio sin expresión de causa, porque el tribunal de alzada no analizó la transgresión procesal alegada en conceptos de violación, relacionados con el principio de igualdad entre el hombre y la mujer y al confundir el interés superior del menor, ante la falta de valoración de pruebas, que trascendió al resultado del fallo.

25.7. De manera que –según el quejoso– aun cuando en la sentencia recurrida se dijo que dicha resolución se dictó en estricto respeto al artículo 1º de la Constitución Federal y se realizó una interpretación conforme a los tratados internacionales y al principio *pro homine*, se

confundieron los aspectos referidos. Lo anterior ya que, a juicio del recurrente, si bien era cierto que éste debía trasladarse a donde fuera necesario a recoger al menor para que el niño ejerza su derecho de convivencias, ello no fue materia de discusión, sino el tema del lugar "in situ" en donde se realizaría la convivencia, pues el niño tendría que recorrer la distancia por el simple hecho que debe salir del domicilio en donde habita y trasladarse a otro lugar, lo cual no fue valorado desde las resoluciones dictadas por la autoridad responsable al resolver el incidente de convivencias.

25.8. Entonces, adujo el recurrente, si se hubiera tomado como base el artículo 4º constitucional –que contiene, entre otros aspectos, la igualdad ante la ley del hombre y la mujer, así como la protección a la familia– debió sopesarse la problemática familiar del caso concreto. Ello, porque el lugar "in situ" no otorgaba las mejores condiciones para la entrega y la reintegración del niño, sino una desventaja para el quejoso, no sólo por los efectos de la competencia, sino también porque no se evitaría el traslado del menor.

25.9. Finalmente, el quejoso manifestó que era necesario que se determinara la interpretación sobre los alcances de las consecuencias legales del divorcio sin expresión de causa, para precisar lo relativo a la igualdad entre el hombre y la mujer, así como lo relativo al interés superior del menor y no como lo hizo el tribunal federal, cuando expuso sobre ese tema que el menor al estar en su casa no estaría en juego su comodidad o bienestar. Por tanto, para el recurrente, ello implicó un análisis de la interpretación judicial deficiente, cuando en atención a los tratados internacionales, el artículo 1º, segundo párrafo, constitucional, las normas en materia de derechos humanos se interpretarían conforme a la propia Constitución y con los tratados internacionales, para lo cual debería procurarse favorecer en todo

tiempo a todas las personas con la protección más amplia conforme al principio *pro homine*, el cual se refiere a ponderar el peso de los derechos humanos para estar siempre a favor del hombre. De ahí que el Tribunal Colegiado tenía el deber de realizar la interpretación de la Constitución para no vulnerar dicho principio en su perjuicio.

26. **Estudio sobre la improcedencia del recurso de revisión.** Precisado lo anterior, para determinar si en el presente caso existe algún tema de constitucionalidad del que deba ocuparse este recurso, es necesario responder a los siguientes cuestionamientos:

En la demanda de amparo, ¿existe planteamiento de inconstitucionalidad de alguna ley o norma general o se solicitó la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal?

En la sentencia recurrida ¿el Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre dicho planteamiento de constitucionalidad?

27. **Primera cuestión: En la demanda de amparo ¿existe planteamiento de inconstitucionalidad de alguna ley o norma general o se solicitó la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal?**

28. Esta Primera Sala advierte que la parte quejosa no planteó la inconstitucionalidad de alguna ley o norma general en su demanda de amparo. En efecto, sus motivos de inconformidad fueron los siguientes:

- 1) La petición de que se tomara en cuenta que el régimen de convivencias debió decretarse para su realización dentro de la jurisdicción del juez del conocimiento de divorcio incausado, porque las partes se sometieron expresamente a ella y fue una decisión confirmada a través de resoluciones dictadas en amparos indirecto y directo.
- 2) La cuestión de competencia fue cosa juzgada y, por tanto, las convivencias familiares debieron fijarse en el Distrito Federal y no como la Sala responsable las determinó, esto es, que el quejoso tenga que ir al domicilio del menor ubicado en el Estado de México (Ecatepec) y trasladarlo a su domicilio en el Distrito Federal (Xochimilco).
- 3)) La afectación al recurrente y, por tanto, a su hijo, por no haberse tomado en consideración que la forma en que se decretaron las convivencias generaría un desgaste para el menor, por tener que trasladarse treinta y cuatro kilómetros del domicilio del niño al del quejoso; además, de que se generarían gastos y traslados únicamente para el promovente del amparo y no para la demandada, lo cual contraviene el principio de igualdad entre el hombre y la mujer previsto en el artículo 4º constitucional.
- 4) Para decretar el régimen de convivencias o confirmar el decidido por el juez natural, la Sala responsable debió atender al interés superior del menor, previsto en la Constitución Federal –artículo 4º–, la Convención sobre los Derechos del Niño –artículos 3 y 9– (tratados internacionales, en términos del artículo 133 constitucional), la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –artículos 3, 4 y 7– y la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal

–artículos 1 y 4–, esto es, decidir tal régimen conforme a las circunstancias del caso concreto y tomando como base el interés superior del menor.

5) El tribunal de alzada decretó el régimen de convivencias en perjuicio del quejoso, porque lo obligó a trasladarse al domicilio de la demandada a recoger al niño de manera inicua, pues sólo benefició a aquélla al no obligarla a ese traslado y, por tanto, dicha autoridad omitió resolver conforme al principio de igualdad entre el hombre y la mujer y vulneró el principio de discriminación de género, así como los artículos 1º, 4º y 133 constitucionales; además, tampoco atendió al interés superior del menor, pues quien sufriría un desgaste por el traslado sería él (treinta y cuatro kilómetros de distancia su domicilio y el de su padre).

29. De lo anterior se desprende que las dos primeras aseveraciones no involucran el análisis de cuestión de constitucionalidad alguna, pues se limitan a insistir en la supuesta falta de competencia del juez de primera instancia para establecer determinados efectos dentro del territorio donde ejerce jurisdicción, lo que fue debidamente atendido por el Tribunal Colegiado y, además, constituye un planteamiento de mera legalidad.

30. Sin embargo, de los siguientes planteamientos sometidos a análisis se desprende que el quejoso adujo esencialmente que el tribunal de alzada dejó de valorar indebidamente las necesidades del niño en atención al interés superior del menor y la igualdad entre la mujer y el hombre al momento de decretar el régimen de visita y convivencia

entre progenitor e hijo. Si bien esta Primera Sala reconoce que lo apuntado no implica un argumento de inconstitucionalidad de norma general alguna, lo cierto es que el planteamiento del quejoso sí entraña cuestiones de constitucionalidad relacionadas con los **alcances de los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal respecto de la institución del régimen de convivencia**, máxime que se denunció específicamente un trato discriminatorio de parte de la autoridad responsable en razón de género. En efecto, toda vez que la igualdad como principio siempre se predica sobre algo, el alegato de trato discriminatorio en relación al establecimiento del régimen de convivencia sí conlleva un cuestionamiento sobre los alcances del artículo 1° constitucional respecto de dicha institución.

31. Este tribunal ya ha establecido que el derecho humano a la igualdad no está delimitado a que deba ser respetado, protegido y salvaguardado únicamente por cierto órgano jurídico o por algún tipo de autoridad. Al contrario, el derecho humano a la igualdad jurídica y, en específico, el principio de no discriminación, no sólo obliga al Poder Legislativo o a los aplicadores de una norma jurídica, sino a todas las autoridades del Estado, tales como los juzgadores u órganos autónomos.
32. Específicamente, por lo que hace a las controversias donde se plantea una situación de desigualdad en razón de género, los órganos judiciales deben verificar, aplicando la herramienta de perspectiva de género, si existen posibles desventajas por dicha condición. Resulta aplicable la tesis 1a. C/2014 emitida por esta Primera Sala de rubro: **“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”**.¹⁰

¹⁰ Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo I, página 523, cuyo texto es: “Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un

33. Es necesario destacar que la utilización de esta herramienta de análisis a fin de verificar si existe una situación de vulnerabilidad por razones de género no es exclusiva para aquellos casos en los que las mujeres alegan una vulneración al derecho a la igualdad. Si bien resulta indiscutible que históricamente han sido las mujeres las que más han sufrido la discriminación y exclusión derivada de la construcción cultural de la diferencia sexual —como reconoció el propio Constituyente en la reforma del artículo 4° de la Constitución Federal publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, en la que se incorporó explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres— lo definitivo es que los estereotipos y prejuicios de género que generan situaciones de desventaja al momento de juzgar afectan tanto a hombres como mujeres.
34. De ahí que, en principio, la perspectiva de género en la impartición de justicia constituya un método que debe ser aplicado en todos los casos, independientemente del “género” de las personas involucradas,

método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.” Amparo directo en revisión 2655/2013. 6 de noviembre de 2013. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo quien, no obstante, coincide con el criterio contenido en la presente tesis. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso.

para detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por su pertenencia al grupo “hombres” o al grupo “mujeres”.

35. Ahora bien, contrariamente a lo argumentado por el recurrente, el Tribunal Colegiado sí dio contestación a los planteamientos de constitucionalidad por él planteados, como se verá a continuación.

36. **Segunda cuestión: ¿El Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre dicho planteamiento de constitucionalidad?**

37. Esta Primera Sala estima que el Tribunal Colegiado sí realizó un estudio pormenorizado sobre el establecimiento del régimen de convivencias impugnado por el quejoso a la luz de los artículos 1° y 4° de la Constitución Federal.

38. En efecto, el tribunal federal consideró que la sala responsable atendió al interés superior del menor para decretar el régimen de visitas y convivencias, pues como fueron fijadas eran las que más favorecían al niño; además, de que ese órgano jurisdiccional estimó que dicha autoridad contó con elementos suficientes para confirmar el régimen de convivencias decretado por el juez natural, como fueron la edad del menor, la voluntad del niño de querer convivir con su papá por así habérselo manifestado al juez y, de manera relevante, concluyó que no existieron elementos que determinaran que el menor corría peligro con su padre.

39. Al respecto, el órgano federal precisó que el quejoso no manifestó cuál sería el peligro que corriera el niño si lo recoge en el domicilio donde vive con su madre, pues para el Tribunal Colegiado no implicaría afectación alguna para el menor el hecho de que hiciera recorridos largos, por el contrario, ello fortalecería los lazos entre ellos. Incluso, el

tribunal abordó el cuestionamiento sobre el lugar en el que el promovente del amparo podría apoyar mejor al menor en sus tareas, argumentando que sería en el domicilio del niño en donde se tendrían los materiales necesarios para cumplir con ellas.

40. Asimismo, respecto de la supuesta vulneración al principio de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en perjuicio del quejoso, el Tribunal Colegiado afirmó lo siguiente:

“[...] también es infundado el concepto de violación en el que afirma el quejoso que se infringió el principio de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, ya que la autoridad responsable al decretar que el quejoso debe acudir al domicilio de la tercera interesada a entregar y recoger al menor, atendió el interés superior del menor y no a lo que mejor conviniera al quejoso o a la tercera interesada, pues atendió a que el menor va a estar en su casa, de ahí que no existe infracción al principio de igualdad que refiere el quejoso”.

41. De la transcripción se desprende que el Tribunal Colegiado sí estudió de manera específica el concepto de violación planteado por el quejoso y concluyó que la autoridad responsable no incurrió en trato discriminatorio alguno, sino que su determinación estuvo guiada exclusivamente por el interés superior del menor. Es decir, el órgano jurisdiccional estableció que el alegato de igualdad del quejoso no tenía méritos, pues toda la argumentación de la autoridad responsable al confirmar el régimen de convivencia establecido por el juez estuvo sustentada en “lo mejor para el niño”, no así en los intereses de alguno de los progenitores.
42. Ahora bien, en sus agravios, el recurrente adujo precisamente que en tales consideraciones existe omisión sobre la interpretación a los

artículos 1º, 4º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de haber estudiado su planteamiento se hubiera pronunciado sobre la transgresión al principio de igualdad entre el hombre y la mujer sin confundir el interés superior del menor, de acuerdo a lo que se advertía en las constancias de autos.

43. Esta Primera Sala estima que no le asiste la razón al recurrente en relación a la supuesta omisión de estudio del Tribunal Colegiado toda vez que, como ya se demostró, dicho órgano jurisdiccional sí estudió dichos planteamientos de constitucionalidad. En contraposición, el recurrente no combatió lo sostenido por el Tribunal Colegiado en el sentido de que su alegato de igualdad no tenía méritos.
44. En efecto, ninguno de sus agravios fue encaminado a demostrar por qué la autoridad responsable sí había incurrido en un trato discriminatorio y por qué supuestamente su condición de hombre fue tomada en cuenta para establecer el régimen de convivencia en su perjuicio. Al respecto, el recurrente no identificó ni su supuesta desventaja por cuestiones de género ni una relación asimétrica con la tercera interesada. Tampoco señaló algún estereotipo o prejuicio en el que haya incurrido la Sala responsable al valorar las pruebas ni cuestionó la neutralidad del derecho aplicable. En realidad, lo que subyace al alegato del recurrente es simplemente que, *en su calidad de padre no custodio*, solamente él tendrá que asumir los costos del traslado y recoger al menor en el domicilio de la tercera interesada, sin elaborar argumentación alguna tendente a demostrar por qué dicha decisión es discriminatoria *en razón de género* y no es una determinación basada en lo que es mejor para el niño.
45. En suma, el recurrente no controvirtió la respuesta ofrecida por el Tribunal Colegiado en la que se determinó que no existió trato

discriminatorio en el acto reclamado sino que, lejos de ello, hubo un pleno acatamiento al artículo 4° de la Constitución Federal en relación al interés superior del menor como principio rector.

46. En este sentido, toda vez que el recurrente en ningún momento controvertió la determinación del Tribunal Colegiado en el sentido de que su alegato de igualdad no tenía méritos, sus argumentos devienen **inoperantes**. Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia sustentada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR INOPERANCIA DE LOS AGRAVIOS CUANDO, POR UN LADO, SE COMBATEN ASPECTOS DE MERA LEGALIDAD Y, POR OTRO, NO SE CONTROVIERTE EL PRONUNCIAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 46/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 174, sostuvo que la materia del recurso de revisión contra resoluciones que pronuncien los tribunales colegiados de circuito en materia de amparo directo, se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. Sin embargo, debe precisarse que para la procedencia del recurso no basta la decisión del tribunal colegiado al resolver la cuestión de constitucionalidad planteada, pues en todo caso la materia y objeto de los agravios en la revisión deben estar orientados a controvertir dicha decisión. Así, es inconcuso que procede desechar el recurso de revisión si a pesar de existir una decisión de dicho tribunal respecto a las cuestiones propiamente constitucionales, los agravios expresados por la recurrente resultan inoperantes en tanto que, por un lado, sólo atacan aspectos de mera legalidad y, por otro, no controvierten la decisión referida.¹¹

¹¹ 1a./J. 67/2011, publicada en la página 278 del Tomo XXXIV, julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.

47. En tales condiciones, dado que los agravios expresados por el recurrente resultan inoperantes, esta Primera Sala concluye que en el caso no se reúnen los requisitos de importancia y trascendencia que condicionan la procedencia del recurso de revisión, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal y en el inciso b) de la fracción II del Punto Primero del Acuerdo General Plenario 5/1999. Por tanto, con fundamento en las fracciones IV y V del Punto Segundo del Acuerdo citado, se impone desechar el presente recurso de revisión, quedando firme la sentencia recurrida.
48. No es obstáculo a esa decisión, la circunstancia de que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya admitido el recurso mediante auto de veintinueve de enero de dos mil catorce, pues tal proveído no causa estado, en virtud de que solamente corresponde a un examen preliminar del asunto y no al definitivo, que compete realizarlo, según sea el caso, al Tribunal Pleno o a una de las Salas; máxime que el acuerdo de Presidencia sólo lo admite con reserva de los motivos que, en su caso, pudiese considerar la Sala para determinar la improcedencia del recurso.
49. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia:

"REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una resolución que no es definitiva, ya que el Tribunal Pleno está facultado, en la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento."¹²

¹² P./J. 19/98, publicada en la página 19 del Tomo VII, marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.

VI. DECISIÓN

50. Al no haber tema de constitucionalidad del cual deba ocuparse esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el presente recurso de revisión, ha lugar a su desechamiento y, como consecuencia, que quede firme la sentencia recurrida.
51. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

RESUELVE:

PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión a que este toca 912/2014, se refiere.

SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al tribunal de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA

PONENTE

MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

**SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA**

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES.

LHOV/acv

En términos de lo previsto en los artículos 3º, fracción II y 13, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.